



PERSPECTIVAS



Edición 168 Enero 2023

SUPLEMENTO DE
ANÁLISIS POLÍTICO



CETCAM

Centro de Estudios Transdisciplinarios
de Centroamérica

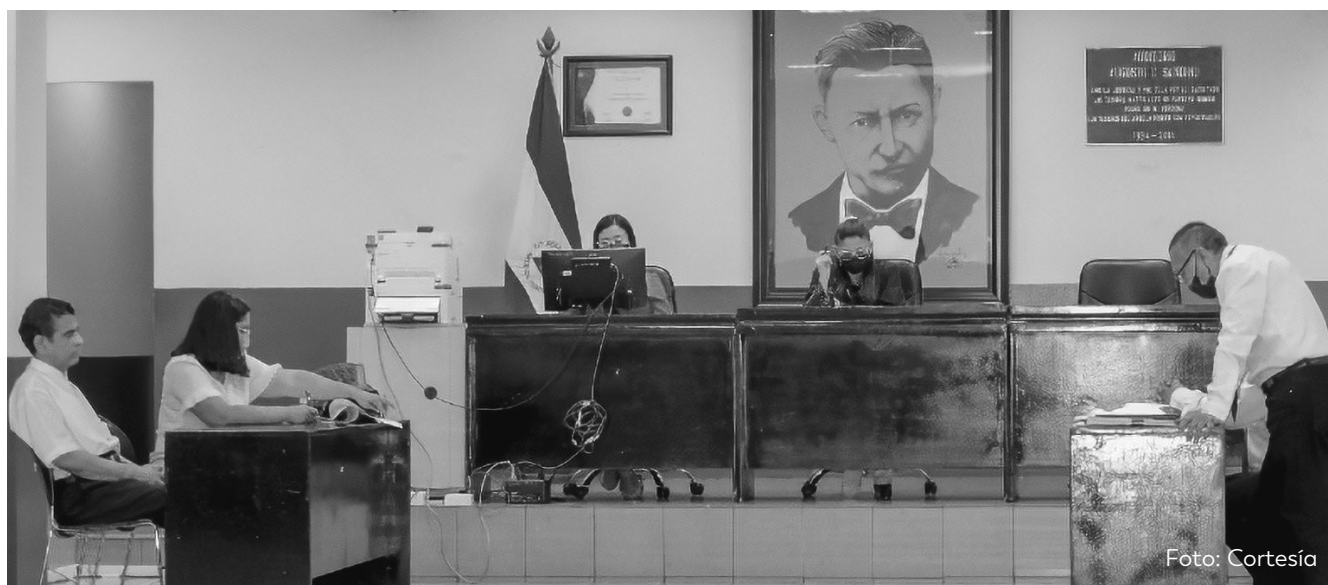


Foto: Cortesía

Nicaragua 2023: el espejismo del control autoritario

Suplemento de análisis político - Edición 168

En el transcurso del 2022, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, avanzó en la constitución de un Estado totalitario, desmantelando grupos organizados de oposición, aplastando las voces proféticas de la iglesia católica, eliminando miles de organizaciones civiles, y consolidando su control sobre las instituciones públicas. Liquidó los últimos medios de comunicación independientes para tener el monopolio del discurso político e impuso el gobierno por terror, aún dentro de sus propias filas, profundizando las contradicciones entre su círculo más cercano, provocando fisuras y numerosas deserciones. Pero no logró superar su crisis de legitimidad, tampoco avanzó en la reorganización de sus alianzas internas y su propia política exterior confrontativa la ha colocado en un fuerte autoaislamiento de la comunidad internacional.

En esas condiciones y con un entorno centroamericano marcado por una tendencia hacia los nuevos autoritarismos, la dictadura de los Ortega-Murillo inicia el 2023 con una gran debilidad, pero todavía con un fuerte control social y político sobre la sociedad nicaragüense, y de su propio círculo de poder. Los Ortega-Murillo están conscientes de esta debilidad y el acortamiento de los plazos hasta que se presente un nuevo imponderable, de manera que son claras las señales que indican su preocupación por la sucesión a fin de seguir manejando los hilos del poder y evitar que se generen luchas internas entre los diferentes grupos del círculo de poder. En esas condiciones, el 2023 inicia con un escenario poco favorable para el régimen, pero como en ciertos pacientes terminales, con signos de estabilidad hasta que se produzca el desenlace fatal.

El control absoluto del Estado

El año inicio con la instalación de los espurios gobiernos municipales impuestos en un proceso electoral fraudulento efectuado en noviembre de 2022. La competencia se efectuó sin ninguna condición ni garantía para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto; antes bien, se convirtieron en una farsa en las que se demostró que a los Ortega-Murillo no les interesa siquiera un mínimo de legitimidad ciudadana. Los candidatos fueron impuestos, solamente se permitió la inscripción de partidos “zancudos” o colaboracionistas, y al final, Ortega se adjudicó el gane de las 153 alcaldías del país en un desenlace absolutamente inverosímil.

De acuerdo con las informaciones periodísticas, las transferencias municipales se incrementaron este año, especialmente en aquellas alcaldías que en el período anterior estaban gobernadas por partidos de oposición; una medida a todas luces clientelista, que pretende atraer a la población descontenta. Sin embargo, la ejecución de proyectos de infraestructura no logrará subsanar la ausencia de autonomía y de una gestión local que responda a las necesidades de la población.

Por el contrario, el resultado es la imposición de un sistema de partido único de facto en el que las otras organizaciones partidarias no son más que comodines irrelevantes para justificar la continuidad de la dictadura, tal como el mismo Ortega declaró argumentando que “la existencia de varios partidos políticos divide al pueblo”. Con estos resultados se completa el control de todas las instituciones, poderes estatales y sistema político, convirtiendo a Nicaragua prácticamente en una monarquía absolutista.

Los pilares fundamentales de ese poder absoluto descansan siempre sobre la Policía y el Ejército, aunque la Fiscalía, la administración de justicia y otras instituciones como migración, telecomunicaciones y gobernación hacen parte de un sistema de órganos para la represión directa y el fusilamiento judicial de sus enemigos políticos. Desprovistos de cemento ideológico y político, el mecanismo para asegurar las lealtades es una combinación de prebendas y corrupción junto con intimidación, cárcel y purgas. La misma práctica es empleada con los altos funcionarios de instituciones estatales y los gobiernos municipales y regionales.



Foto: Cortesía



Pero la moneda tiene otra cara y el precio que estos funcionarios pagan es vivir bajo permanente vigilancia, sometidos a una intensa presión, estrictos controles y en muchos casos obligados a actuar contra sus principios y valores. A estas alturas, la posibilidad de un cambio en el régimen es visto más como una liberación que como una amenaza por una gran cantidad de empleados públicos, pues muchos están conscientes de la ilegitimidad y los abusos que el régimen comete a diario contra ellos mismos y el resto de la ciudadanía, sobre todo desde que se conocen las deserciones de su círculo más cercano, así como los castigos impuestos a personas muy allegadas tal como ha sucedido recientemente con el comisionado Adolfo Marengo y un grupo de funcionarios de alto nivel en el poder judicial.

El temor y la insatisfacción se han extendido a todos los niveles y se manifiestan de diversas formas: críticas a la dirigencia por parte de militantes sandinistas, deserciones de funcionarios públicos de distinto nivel, aumento de la corrupción en todas las instituciones públicas a tal punto que ya se escapa del control del propio régimen, entre otras. Los Ortega-Murillo han tratado de contener la descomposición y mantener la disciplina dentro de sus filas aplicando a sus partidarios la misma medicina que a los opositores; sin embargo, este tipo de controles

represivos solamente agudizan el descontento y socavan los endeble apoyos con los que cuentan.

Continuidad de la represión

Durante el 2022 Ortega reforzó el control social y político toda vez que su correlación interna no mejoró ni logró estructurar alianzas que le proporcionen una base de sustentación para compensar la profunda falta de legitimidad de la ciudadanía, tal como quedó demostrado con las elecciones presidenciales del 2021 y las municipales de noviembre pasado. La dictadura se ha sostenido exclusivamente con el uso de la fuerza y la represión, pero eso no le da la viabilidad política que necesita para asegurar su continuidad al menos con un mínimo de legitimidad y más bien alimenta un ciclo pernicioso donde la continuidad de la violencia como sistema profundiza la disidencia, la desafección y el rechazo ciudadano.

Los encarcelamientos arbitrarios se incrementaron en 2022, de tal manera que, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, la cantidad de personas prisioneras políticas pasó de 168 a 235. Los blancos de la represión son, en primer lugar, los activistas y líderes del movimiento cívico en diferentes localidades, periodistas y medios independientes. El propósito es dismantlar la



Foto: Cortesía

capacidad organizativa de las agrupaciones democráticas, de manera que la represión ha impactado en las estructuras y acciones de resistencia cívica.

Otra línea de la ofensiva represiva se ha dirigido en contra la sociedad civil con la cancelación de más de 3 mil asociaciones civiles, laicas y religiosas que representan aproximadamente la mitad de las organizaciones sin fines de lucro registradas antes del 2018. Estas cancelaciones han implicado la pérdida de millones de dólares en cooperación dirigidos a los sectores más empobrecidos, el debilitamiento de la defensa del medio ambiente y el cambio climático, el silencio de las voces defensoras de los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y la diversidad sexual, el aplastamiento de la libertad de expresión y organización.

Los ataques más violentos se han dirigido a la libertad de religión, en especial a la iglesia católica. La diócesis de Matagalpa presidida por el obispo Rolando Álvarez, fue objeto de repetidos actos de violencia estatal que culminó con su captura junto a varios sacerdotes y laicos vinculados a labor pastoral de la iglesia, así como la clausura de las radioemisoras católicas y el exilio forzado de varios religiosos más. El objetivo

era acallar la voz profética más importante dentro del país que denunciaba la violación de los derechos humanos y cuestionaba sistemáticamente a la dictadura. Actualmente, el obispo y un grupo de sacerdotes están sometidos a juicios espurios. Tan extendida ha sido la represión contra los miembros de la Iglesia católica que en realidad se trata de una persecución por razones religiosas y un ataque directo a la libertad de conciencia. Para la ciudadanía, este ha sido un motivo más para acumular descontento y profundizar los agravios considerando que en Nicaragua una mayoría de población es católica.

El espejismo económico: incertidumbre y migración

Con la fuerza y la represión, Ortega ha logrado mantener el control político de Nicaragua, pero uno de sus flancos más débiles es la economía. Según los indicadores de los organismos financieros internacionales la economía nicaragüense se desempeñó positivamente, mientras del otro lado, esos números contrastan drásticamente con una situación de mayor pobreza, desempleo y desesperanza de la población. De manera que al medir la situación económica por su impacto en las condiciones de



Foto: Cortesía



Foto: Cortesía

vida de la gente, la conclusión es que la gestión del régimen de Ortega está fracasando estrepitosamente, no puede ofrecer soluciones duraderas a la crisis social y las difíciles condiciones de vida que golpean a la mayoría de los nicaragüenses.

El gobierno presenta cifras optimistas considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido en los más de lo proyectado en los dos últimos años, las exportaciones se mantienen al alza, las reservas internacionales son las más altas en muchos años y la recaudación fiscal alcanzó sus metas antes de finalizar el 2022. Estos “logros” han sido apuntalados por dos importantes contrafuertes externos: el apoyo de los organismos financieros internacionales, y las remesas de los

nicaragüenses en el exterior que ya se acercan a los 3,000 millones de dólares. Pero el costo que han pagado las familias en términos de poder adquisitivo, calidad de vida y desintegración social ha sido sumamente alto.

La capacidad de compra de las familias se ha visto disminuida por el lado de los ingresos debido a la disminución del salario promedio que se mantiene por debajo de las cifras del 2017; mientras que, por el lado de los gastos, los precios se han disparado de tal manera que el costo de la canasta básica se ha incrementado significativamente a lo largo de 2022. Las empresas medianas y pequeñas luchan por sobrevivir frente a una política de terrorismo fiscal; y la inversión privada no se ha recuperado. Esto implica que la generación de empleos del año pasado y los subsiguientes estará por debajo de lo que se necesita para absorber a las nuevas generaciones que se incorporen al mercado laboral. Los trabajos informales se multiplicaron y los ingresos de las familias además de disminuir, se volvieron irregulares.

La migración, más bien el desplazamiento forzado, se ha convertido en el indicador más claro de la incertidumbre y el deterioro de las condiciones de vida de la población. Desde el 2018 a esta parte se ha producido un brutal vaciamiento del país por la emigración de más de 500,000 nicaragüenses, lo que representa un 7.5% de 6,700,000 habitantes; de manera que Nicaragua se ha convertido en el principal expulsor centroamericano de migrantes por encima de Guatemala, El Salvador y Honduras desde 2022. Uno de sus impactos más importantes, actual y futuro, es en la disponibilidad de fuerza de trabajo además de pérdida de talentos, capacidad emprendedora y la productividad del país. La gente emigra acicateada por una mezcla de motivaciones que tienen en el centro la incertidumbre y falta de esperanza en que su situación mejore, pero también por la represión, la vigilancia y el control autoritario sobre la población.

Frente a esta trágica realidad, los logros económicos que pregonan la dictadura no son más que un cruel espejismo, de manera que la perspectiva para el 2023 es que esas condiciones se van a mantener para Nicaragua, se prevé que el flujo de migración persista a pesar de las dificultades que ahora representa por las medidas migratorias que han adoptado Estados Unidos y Costa Rica, los principales países de destino para los nicaragüenses. Por otra parte, a pesar de que Ortega cuenta con el respaldo de ciertos organismos financieros como el BCIE, lo cierto es que los fondos externos se han reducido significativamente, de manera que no logrará llenar las brechas presupuestarias aun cuando en el corto plazo, se incrementen las remesas y la recaudación fiscal.

Nicaragua: un Estado paria

El aislamiento internacional y el impacto de las sanciones dirigidas a la cúpula del poder, a las empresas de la familia y a las instituciones involucradas en la represión y la extracción de rentas en algunos sectores de la economía, continúan golpeando a la dictadura y sus aliados. Ningún gobierno democrático de Europa y América Latina, sin importar su

inclinación política e ideológica, quiere verse asociado al régimen de Ortega; más bien, es denunciado sistemáticamente por sus ataques a la democracia y la sistemática violación de los derechos humanos. Ortega está solo y en conflicto con las más importantes naciones democráticas del mundo, especialmente durante el 2022 cuando manejó una política exterior confrontativa e irrespetuosa con numerosos países, foros e instancias internacionales con el argumento falso de no permitir injerencias y defender la soberanía.

Para contrarrestar el aislamiento que él mismo provocó, Ortega estableció relaciones diplomáticas con China después de romper con Taiwán, ha estrechado sus relaciones con Rusia, a quien apoyó en su agresión a Ucrania; también ha acercado sus relaciones con Irán y otros pintorescos personajes en el Caribe. Sin embargo, estas alianzas no han tenido el efecto político y económico que esperaba la dictadura. Por el contrario, han reforzado el alineamiento del régimen con brutales dictaduras y regímenes ultranacionalistas, teocráticos y totalitarios que generan el rechazo de gran parte del mundo. Aparte de enviar un mensaje tranquilizador a sus bases, estas asociaciones no le han significado



Foto: Cortesía

ninguna ganancia a la dictadura, por el contrario, la alianza con Rusia y su apoyo a la agresión contra Ucrania, genera preocupaciones de seguridad a los Estados Unidos y podría involucrar nuevamente a Nicaragua en un conflicto entre potencias.

Es cierto que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora no han modificado el comportamiento del régimen, pero le imponen costos importantes y contribuyen a su desgaste. Si no fuera así, Ortega no se quejaría ni solicitaría constantemente que se levanten. Además, las sanciones alimentan contradicciones entre los grupos de poder al interior del régimen y elevan el costo de apoyar a Ortega.

Una resistencia débil, pero activa

Durante todo el 2022, Ortega ha sostenido una política de represión activa en contra de las organizaciones, activistas y líderes del movimiento cívico dentro del país. La represión sistemática ha tenido como consecuencia la cancelación de personerías jurídicas a más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro de distinto tipo, el desmantelamiento de los tejidos de organización social que han existido en Nicaragua desde hace varias décadas y una implacable persecución en contra de numerosos activistas y líderes que ha empujado a muchos a salir del país de manera forzada para proteger su vida e integridad.

Evidentemente, la institucionalización del estado policial, la continuidad de la política de represión y las difíciles condiciones de vida que golpean duramente a la toda la población, han tenido como consecuencia un debilitamiento del movimiento y las acciones de resistencia cívica, considerando que numerosos activistas y líderes son prisioneros políticos o están en el exilio; sin embargo, dentro del país persisten grupos organizados que se mantienen activos a pesar de la vigilancia y persecución.

En el exterior, numerosos grupos de nicaragüenses exiliados y de la diáspora en diferentes países, continúan realizando actividades de diverso tipo que van desde la denuncia e incidencia internacional, hasta las organizativas; sin embargo, el proceso para la constitución de un frente amplio democrático sigue presente como una demanda de toda la población y un reto de primer orden para todos esos grupos en el 2023. Además, permanece el reto de construir y mantener los vínculos entre las organizaciones que se encuentran el exterior y las que están dentro de Nicaragua. Mientras entre la ciudadanía se está alimentando el caudal de un río subterráneo de descontento.

En ese sentido, el régimen de los Ortega-Murillo insiste en vender el espejismo de que controla a Nicaragua a través de todos sus recursos autoritarios y represivos; pretende engañar a la población, a la comunidad internacional y a sus propios partidarios, pero lo cierto es que cada vez se encuentra más cerca del momento crucial para el desenlace de la crisis. Ellos lo saben y las fuerzas democráticas no sólo deberían prepararse para ese momento, sino que podrían contribuir a acelerarlo.



Foto: Cortesía



Foto: Cortesía

2023: Centroamérica en la encrucijada entre **democracia** y **nuevos autoritarismos**

Desde que finalizaron los largos conflictos internos en Centroamérica, la región se encuentra en una disputa abierta entre los remanentes autoritarios y las tendencias hacia la democratización. Algunos análisis realizados a finales de la década de los 90 en el siglo pasado, adelantaban que los grandes cambios y las revoluciones no habían significado un verdadero proceso de construcción democrática para la región.

Durante esta primera mitad de la tercera década del siglo XXI, Centroamérica se enfrenta nuevamente a la encrucijada entre los nuevos -viejos- autoritarismos que aceleradamente se extienden por todo el istmo y que tienen en Nicaragua su más terrible exponente.

En el transcurso del 2022, esos nuevos autoritarismos han desplegado repertorios

bastante similares al menos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En todos los países se han desencadenado procesos, o ya existían mecanismos, para controlar a los poderes estatales por parte de los ejecutivos; se han impuesto estados de excepción bajo el pretexto de la seguridad, la lucha contra las pandillas y el narcotráfico en El Salvador y Honduras, así como la imposición de un estado policial en Nicaragua, que han tenido graves consecuencias para la población por las masivas violaciones a los derechos humanos y porque sientan graves precedentes. A estas situaciones se agregan la persecución y silenciamiento de la prensa; y la criminalización de la protesta, y la persecución a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, entre otros.

Las expresiones autoritarias no se limitan al ámbito de lo político, sino que trascienden al de

las condiciones de vida de las grandes mayorías centroamericanas y las posibilidades de futuro. Más de la mitad de la población en la región es joven, en plena capacidad productiva y con proyectos de vida por delante; sin embargo, las políticas económicas y sociales siguen reproduciendo las enormes inequidades, además de la pobreza y la exclusión.

De tal manera que la incertidumbre en el futuro, las difíciles condiciones de vida, la violencia y la inseguridad se han convertido en una mezcla compleja de motivaciones que empuja a grandes grupos de población a desplazarse de manera forzada, exponiéndose a riesgos y más violencia para llegar a Estados Unidos en busca

de nuevas oportunidades. La región se ha convertido en una gran expulsora de seres humanos, perdiendo un enorme capital social y las posibilidades de futuro.

Las perspectivas para el 2023 no son favorables para Centroamérica. Desde los primeros días del año se vislumbra el reforzamiento de estas tendencias autoritarias que están llegando incluso a Costa Rica. A contracorriente, la sociedad civil y la prensa centroamericana se mantiene activa en la defensa de la democracia frente a estos nuevos autoritarismos, pero hace falta fortalecer los espacios y redes de acción conjunta en la región. Ese es uno de los grandes retos de los actores sociales para este año.

2023: Centroamérica en la encrucijada entre **democracia** y **nuevos autoritarismos**



Revoluciones no significaron un proceso democrático



Reaparecen los nuevos -viejos- autoritarismos teniendo a Nicaragua como más terrible exponente.



En todos los países existen controles en los poderes del Estado, estados de excepción en El Salvador y Honduras, estado policial en Nicaragua, criminalización de las protestas, persecución a la prensa y a defensores de derechos humanos

Finales de la década de los 90

Primeras décadas del siglo XXI

2022

Pobreza, exclusión
dificiles condiciones de vida, violencia y la inseguridad



Obligan a desplazamientos forzados a Estados Unidos, exponiéndose a riesgos y más violencia

2023

Año no favorable para Centroamérica